

# El “posneoliberalismo” para una reforzada hegemonía del capital

Dra. Beatriz Stolowicz

Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco (UAM-X), México

Algo no anda bien en los análisis sobre América Latina, si en un momento se afirma categóricamente que la derecha ha sido derrotada, y poco tiempo después se afirma que hay una contraofensiva de la derecha. Entonces no estaba derrotada. Sin duda perdió fuerza electoral en algunos países gracias a las luchas populares, pero la base de su poder, que es el capital, se fortaleció tanto material como simbólicamente. Este fortalecimiento del capital se llevó a cabo con discursos contra el neoliberalismo.<sup>1</sup>

Llevo muchos años advirtiendo sobre el error de que la izquierda use el término *posneoliberalismo*, porque es una estrategia dominante ejecutada desde comienzos de los noventa para estabilizar la reestructuración capitalista iniciada en los setenta. Estrategia de estabilización sin duda exitosa, que se ha ejecutado explotando las debilidades del llamado pensamiento crítico.

Una de esas grandes debilidades es tomar el discurso, la retórica de los dominantes, como si ella expresara sus verdaderos objetivos y acciones. Dando por válidos sus encubrimientos, se queda atrapado en el terreno por ellos construido. La idea misma de *neoliberalismo* ha

<sup>1</sup> Este trabajo es una conferencia magistral presentada el 10 de septiembre de 2015 en el Seminario Internacional Marx Vive “Economías alternativas en nuestra América en medio de la crisis capitalista”, organizado en La Paz por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia y el Colectivo Espacio Crítico de Colombia.

sido una trampa, pues han sido los dominantes los que lo han definido y han dicho cuáles son sus “alternativas”. Construyeron un fantasma para que le pegaran sin tocarlo. Como decía Marx en los *Grundrisse*, para que se creyera “que le pegaban al burro cuando sólo le pegaban a la bolsa”.

Hay que partir de lo fundamental y no perderse en esto: que la contrarrevolución capitalista que comienza en los años setenta tenía por objetivo restaurar las ganancias del capital y su poder sin restricciones. Para ello había que derribar todas las barreras que lo impidieran. Se trataba de demoler la fuerza social acrecentada del trabajo, los derechos conquistados y las instituciones que los consagraban. Se operó desde la economía, con políticas recesivas para someter al trabajo por desempleo, y con ello abatir drásticamente el salario directo y el salario indirecto, para restaurar las tasas de plusvalía y de ganancia. Se hizo con tremenda violencia política para eliminar las resistencias de los trabajadores. Y se hizo con una ofensiva ideológica contra el Estado de bienestar, para demoler de sus funciones aquellas que mejoraban la posición del trabajo. En su retórica *de choque* aparecía como negación del Estado en general, pero era solo retórica. Porque jamás negaron al Estado como instrumento privilegiado del capital. Se trató de una operación de propaganda, que no correspondía a la realidad, porque la reestructuración capitalista se hizo con una intensa intervención de aquel. La propaganda del “no Estado” ni siquiera corresponde al “nuevo liberalismo” que promueven Hayek y Cía. en la Sociedad Mont Pèlerin. Fue rechazado el *laissez faire* y se reclamó “la intervención del Estado para la competencia”, es decir, al servicio del capital. Le asignan al Estado muchísimas funciones para construir ese Orden del Capital buscado, que articula distintos órdenes: económico, jurídico, político y social.

Tomando como verdad la propaganda, se impuso la idea de que el neoliberalismo es sólo mercado, no-Estado, y de ahí que toda apelación al Estado se tomara como antineoliberal o posneoliberal. Una tremenda trampa sobre la que se construyó la estrategia de reestructuración capitalista.

Desde su comienzo fue concebida en etapas. Una primera de *demolición* y otra de *estabilización*. Cuanto más profunda fuera la demolición, más sencilla sería la estabilización. Para demoler a fondo fueron necesarias dictaduras. Para estabilizar serían útiles los regímenes re-

presentativos que construyeran consensos. El “aprendizaje” de la represión aseguraría que todos buscaran la gobernabilidad de la *democracia* evitando la conflictividad, incluida la izquierda, si quería ser admitida en el nuevo régimen en calidad de pares.

A comienzos de los noventa, la estrategia de estabilización se presentó como “superación del neoliberalismo y contraria al populismo”. Realmente era el fruto de un consenso latinoamericano –no “de Washington”– entre los sectores más lúcidos de la clase dominante latinoamericana, sus intelectuales y sus representantes políticos, que es parte de la clase internacional, con intereses transnacionales, y que desde luego coincide con los intereses de Washington.

El consenso político en la democracia gobernable debía promover un nuevo consenso estructural. Definieron al “neoliberalismo” como “monetarismo recesivo de *laissez faire*”, aunque nunca fuera de *laissez faire*, y para superarlo había que “volver al crecimiento”. La crisis de la deuda fue la “oportunidad”, así lo decían, para que se asumiera que solo la inversión extranjera directa iba a hacer posible el crecimiento, porque daría capital, tecnología y mercados. Para ello había que abrir las economías. América Latina podría insertarse en el mercado global “exportando lo más abundante”, es decir, como primario-exportadora. Había que abatir la inflación y reducir el déficit fiscal porque había que pagar la deuda externa. Había que flexibilizar el trabajo para aumentar la productividad para hacer atractivas las inversiones. Como la estabilidad política estaba amenazada por el empobrecimiento, había que pagar la “deuda social”. Y para obtener los recursos se necesitaban privatizaciones.

Ese fue el consenso estructural sobre el “crecimiento con equidad” que promovió la autodenominada “nueva Cepal” declarando su convergencia con los neoclásicos. Explotando su credibilidad entre los pensadores críticos, legitimó al capital transnacional no solo como necesidad sino como virtud. Decía que la globalización era “inevitable” por el cambio tecnológico, como si este fuera una fuerza metafísica ajena a la expansión del capital, y que además era virtuosa porque expresaba las nuevas relaciones de “interdependencia”. La influencia sobre los críticos también la ejerció el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo la presidencia del cepalino Enrique Iglesias.

La estabilidad política requerida exige atacar a corto plazo la extrema pobreza con transferencias gubernamentales focalizadas. Pero para

no volver al “populismo”, a mediano y largo plazo hay que llevar a cabo una reconfiguración profunda de la sociedad. Esto es central. La meta es gestar una *ciudadanía patrimonial*, que es la idea social-liberal de una “democracia de propietarios”. El argumento es que: “Los pobres son pobres porque carecen de activos y no pueden participar en el mercado”. Es función del Estado buscar la “equidad” dándoles a los “excluidos del mercado” las “oportunidades” de estar en él para adquirir los bienes y servicios necesarios: educación, salud, vivienda, seguridad para la vejez. De esta manera, dicen, se ejercen los “derechos sociales” al bienestar (hablan de derechos). Haciendo entrar al mercado a todos se asegura la “universalidad de los derechos”.

A los empresarios renuentes con la ampliación del gasto social, les decían que no les afectaría sus ganancias porque hay “una manera distinta de hacerlo”: el Estado financia, pero proveen los privados. Y para confundir a los pensadores críticos, hablaron de la participación de la sociedad civil y la comunidad. Como al capital hay que incentivarlo a invertir se reducen sus impuestos, pero se aumentan los que pagan los asalariados y los consumidores pobres. El aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), profundamente regresivo, es presentado como “progresivo” porque “financia la equidad”: los menos pobres financian a los más pobres.

El gasto social, así financiado, da ganancias al capital por acción del Estado. Si el neoliberalismo era mañosamente conceptualizado como inacción del Estado y desatención por lo social, esto es “superación del neoliberalismo”.

La estrategia de estabilización, que fortalece al capital y su concentración, alimenta y acelera las crisis y sus efectos sociales disruptivos. Pero cada una de ellas es utilizada como oportunidad demoledora para implementar nuevas acciones de reconfiguración capitalista, que son presentadas una tras otra como “alternativas”.

Tras la crisis de 1995 (con sus modalidades Tequila, Samba y Tango), la principal preocupación del “nuevo” Banco Mundial bajo la conducción de Stiglitz era el riesgo de “rebrotos nacionalistas y populistas” que pusieran en riesgo las aperturas y la globalización. Los posneoliberales dicen que las reformas aperturistas y liberalizadoras, que ellos mismos promovieron, son necesarias pero que se hicieron mal, que hay que corregirlas. Las adjudican al Consenso de Washington, que es un fantasma construido porque ha sido un Consenso de

América Latina. Insisten en que hay que cambiar las tácticas para legitimar las reformas estructurales.

La democracia gobernable, en profunda crisis de credibilidad, es ineficaz para controlar la conflictividad. La ineficacia del sistema político debe ser compensada con una intensificada acción gubernamental, con políticas públicas para neutralizar los rechazos y reconstruir el consenso.

Se impulsa un neocorporativismo liberal para reforzar el control sobre la sociedad. Por un lado, se promueven y financian ONG para legitimar la gestión privada de lo social con financiamiento público, y dando empleo a muchos profesionales de clase media. Por otro lado, a los sindicatos críticos que sobrevivían en el sector público los debilitaron con la llamada reforma del Estado, con descentralizaciones para precarizar el trabajo y con subrogaciones, con el fin de liquidar los contratos colectivos. El discurso contra una “burocracia sindical que defiende privilegios y cierra el camino para los que no tienen trabajo” fue efectivo entre muchos críticos del neoliberalismo.

Los posneoliberales echan la culpa de la crisis a la falta de regulación al capital financiero. Entonces apareció la palabra mágica: “regulación”. Si el neoliberalismo es “desregulación”, la regulación es posneoliberalismo del bueno. Y el llamado pensamiento crítico sucumbió, se tragó el cuento. Porque se regula a favor del capital, se regula incluso para la autorregulación. No es para limitar al capital financiero sino para darle estabilidad, para que extienda sus mercados, para que incremente sus ganancias. Se le abren mercados con los fondos privados de pensiones como ahorro forzoso; con la promoción del negocio tremendamente rentable de las microfinanzas para pobres; con políticas sociales de “seguros populares” para la educación y la salud. La muy liberal regulación para la competencia se presenta con un eufemismo: “regulación prudencial”. Como un padre que dice: te pongo reglas por tu bien, pero te dejo ser, no te coarto y además te apoyo.

Estalla la crisis de 1998, que se prolonga hasta 2003. La señal de alarma es que hay incluso levantamientos populares, como los de Bolivia y Argentina. Los posneoliberales dicen que las reformas “de segunda generación” –que ellos promovieron– resultaron en un “neoliberalismo plus”. Que hay que “reformular las reformas”. Pero ahora hacia un “nuevo desarrollo productivista” que “conecte al capital fi-

nanciero con la economía real”. Se presenta como el capital productivo “bueno” contra el capital especulativo “malo”, cuando siempre se potencian entre sí. El “desarrollo productivista” es una vía adicional para fortalecer al capital financiero en riesgo de desvalorización, para que se recicle como capital productivo en el circuito de acumulación: en infraestructura física, sistemas multimodales de transporte, telecomunicaciones, minería, agua y energía. Se monta el soporte institucional con la Inicativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y el Plan Puebla Panamá.

Con el “nuevo desarrollo productivista”, basado en el control territorial para la explotación de todos los recursos naturales y con la infraestructura necesaria para extraerlos, el tiempo de rotación del capital es más lento, pero seguro. Porque su rentabilidad está garantizada por el Estado posneoliberal.

El mecanismo es la “posprivatización”, promovida por el Banco Mundial ante el desprestigio de las privatizaciones, que es el núcleo conceptual de las asociaciones público-privadas. Este es otro anzuelo para el llamado pensamiento crítico, porque en el caso de los bienes comunes que son formalmente propiedad de la nación el Estado no pierde la titularidad jurídica, pero la explotación la realizan privados. El Estado da seguridad jurídica con contratos muy largos en los que se garantiza que no habrá expropiaciones ni otro tipo de afectaciones como huelgas, así como garantiza la remisión de ganancias. Y además asume los riesgos garantizando precios y beneficios, y financia parte importante de la inversión, que asegura en las leyes de presupuesto, tanto de egresos como de ingresos. Aunque le cobre impuestos, para su inversión el Estado transfiere al gran capital recaudación fiscal y los fondos de pensiones de los trabajadores del Estado.

Para el “nuevo desarrollo productivista”, en su lógica neocorporativista de control social, los posneoliberales reconocen la utilidad de los sindicatos en el sector privado, a condición de que asuman como propios los objetivos del capital, que asuman a la empresa capitalista como “comunidad de trabajo”, que acepten que los salarios estén condicionados a la productividad; a estos sindicatos se les apoya, incluso, con negociaciones salariales tripartitas.

El activismo reclamado al Estado posneoliberal nos lleva al papel central del derecho en la reestructuración capitalista. La estrategia contempló, desde sus inicios, su papel fundamental en la construcción

del Orden del Capital. Como principio se rechaza el fetichismo sobre la propiedad privada, que no debe ser concebida solo como la clásica propiedad individual; admiten otras formas de propiedad, como las cooperativas, si son útiles para aumentar las ganancias de la gran empresa. Se convoca a la “flexibilidad del derecho”, que combine una constitución económica con un positivismo jurídico flexible, con leyes *ad hoc*. Las asociaciones público-privadas son una expresión de este derecho flexible.

Se busca que el Orden Global del Capital sea obligatorio para todos los países. Se multiplican los tratados y convenios internacionales, emanados tanto del derecho público internacional como del derecho privado transnacional, un pluralismo jurídico que se impone como Estado de derecho nacional, para que, más allá de las circunstancias políticas internas, sea más costoso para los países salirse de esos acuerdos, que permanecer en ellos. A esto los neoinstitucionalistas lo llamaron “amarres de salida”.

La construcción jurídica del orden del capital incluye también una intensa actividad legislativa y judicial para criminalizar las protestas. Para judicializar las relaciones políticas, despoltizándolas, para que no dependan de relaciones de fuerza cambiantes y los conflictos se diriman en tribunales, incluso los conflictos internos de los partidos.

Ese “nuevo desarrollo” fue presentado a comienzos de este siglo como la “alternativa progresista”. Su lema es la *inclusión*, una palabra cara al pensamiento crítico. Pero es la inclusión de todos al mercado.

Se impulsa la denominada “reforma agraria asistida por el mercado”: la titulación de tierras rurales y urbanas de los pobres para que “tengan activos con los cuales salir de la pobreza”. Claro que la “presión del mercado”, a veces acompañada de coerción paramilitar, los ha obligado a venderlas, a precios irrisorios, al capital que expande su control territorial; es un despojo legal.

La “inclusión” también está planteada para “reducir la desigualdad” (no hay léxico de la izquierda que no haya sido expropiado). ¿Cómo? Accediendo al consumo, aunque sea endeudándose y de por vida, engrosando así las ganancias del capital importador, comercial y financiero, que suelen ser uno solo. Es la “prosperidad al debe”, como dice Jairo Estrada. El consumo de celulares, que se ha convertido en la metáfora del “nuevo bienestar” aunque se carezca de agua potable, es uno de los indicadores que ha tomado el Banco Mundial para con-

cluir que América Latina pasó a ser un continente de “clase media emergente”. Según su estratificación, la clase media es la que tiene un ingreso de entre ¡4 y 50 dólares al día! Al menos ya duplicó la línea de pobreza de 2 dólares a 3.99...

La inyección de dinero fresco por el Estado con transferencias monetarias condicionadas y financiando las inversiones privadas, también con exenciones fiscales, así como la elevación especulativa de precios de exportación de los productos del extractivismo, alentó el crecimiento desde 2004. No alcanzaban las fanfarrias para celebrar el éxito del modelo posneoliberal del “nuevo desarrollo”. El endeudamiento de los pobres no importaba mientras siguieran pagando. Pero llegó la crisis de 2008. Además de la cesación de pagos en Estados Unidos, estallaron movimientos de “no pago” en varios países; el más importante por su volumen fue en la India, porque implicó el repudio y condonación de deuda de 40 millones de pequeños campesinos y comerciantes deudores en medio de suicidios masivos. Pero también en Nicaragua, inundado de capital extranjero en microfinanzas. Como los microcréditos ya no son seguros si los deudores se rebelan contra la usura, el capital financiero internacional lanza una nueva operación para asegurar ganancias: la llamada Inclusión Financiera.

La Inclusión consiste en la bancarización forzosa, y para ahorrarle costos a la banca (incluido personal) se usan las tecnologías de computación y celulares, en lo que están todas las transnacionales metidas, empezando por Bill Gates y las telefónicas. El principal actor es el Estado: que legisla para obligar a colocar en la banca todo el fondo de consumo de *los que viven de su trabajo* actual y pasado. Esta conceptualización de Ricardo Antunes (*los que viven de su trabajo*) permite abordar el complejo mundo del trabajo en la acumulación, más allá de si son formales o informales. La inclusión financiera los abarca a todos: el Estado hace que pasen por la banca las transferencias de las políticas sociales, las nóminas, las jubilaciones y pensiones, el pago de los servicios y de los impuestos. Y además el Estado paga comisiones a los bancos por el servicio de la bancarización. La tarjeta de crédito es desplazada por la tarjeta de débito, negocio sin riesgos. El asunto crucial es este: ¿qué significa, en términos de ganancias, disponer aunque sea por un día de todo el fondo de consumo de los que viven de su trabajo, de esos inmensos montos de dinero?



Sin que baste lo anterior, quedó establecido también que la inclusión financiera se mide por el consumo que hagan los titulares de las cuentas de otros servicios financieros que dan ganancias a la banca. Por ejemplo, el crédito de nómina, otorgado con el dinero del trabajador y por el cual paga intereses. Esto ha sido presentado como el *summum* de la inclusión progresista, porque todos acceden a activos. Ahora la condición de “ciudadano incluido” ya no se prueba con la cédula de identidad, sino con un plástico bancario. No faltará mucho para que traigan estampada una *selfie*.

Con ser tan grave, no es todo. La operación incluye la llamada *educación financiera*. En el colmo del cinismo, han dicho que la crisis del 2008 ha sido causada primordialmente por las malas prácticas financieras del público, sobre todo de los pobres, y no por la voracidad rentista del capital. Se necesita educarlos para dar estabilidad al sistema financiero. La llamada Educación Económica y Financiera debe ser incluida en el currículo escolar oficial, desde el preescolar hasta el final de la Secundaria.

Para enseñar desde chiquitos a pensar desde la lógica capitalista de la rentabilidad. Que hay que ahorrar para acceder a la educación, a la salud. Que solo con “mi amigo” el banco puedo llegar a “ser alguien”. Para pensar la vida toda desde el dinero. Es una operación hegemónica inédita del gran capital, total y a largo plazo. Como dicen sus promotores: “Para abarcar a una generación completa y en gran escala”.

Es diseñada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que da las directrices sobre sus contenidos y guías tácticas para eludir resistencias. Por ejemplo: que se presente adaptada a las condiciones nacionales y se implemente gradualmente; que se incruste en los currículos existentes en ciencias sociales, economía, matemáticas, educación cívica y literatura; debe ser evaluada formalmente, no solo por conocimientos sino por resultados prácticos en el mayor uso de servicios financieros por parte de los niños, jóvenes y profesores; las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) medirán esta “alfabetización financiera”. La conducción, incluso pedagógica, está a cargo de los bancos centrales porque, dicen, “son más confiables por su mayor independencia política”. Que deben firmar convenios con los ministerios de educación, para asegurar su función instrumental. Se conmina a que el sector privado también participe en el diseño local y en la capacitación de los

maestros. Debe articularse con los programas de entrega de computadoras a niños y jóvenes. Y reforzarse con instrumentos diversos como páginas electrónicas, videojuegos, obras de teatro, telenovelas, etc., y la celebración de la Semana del Dinero en la segunda semana de marzo de cada año. Es una operación total.

Pero la “inclusión progresista” no acaba ahí. Están los llamados Negocios Inclusivos de las transnacionales para encadenar a los pequeños agricultores a la producción de valor, para que produzcan lo que ellas les compren a los precios que quieran, y lo produzcan en el modo como ellas les exijan, sin tener que tomarse el trabajo de despojarlos de su tierra. Es una empresa de subsunción real en capital de todos los dominados, que cuenta también con apoyo gubernamental.

Haciendo sentir a todos como individuos incluidos en la modernización, las ideas dominantes arraigan en prácticas sociales que fortalecen materialmente al capital y el conservadurismo y la despolitización. Rostow, con su *Manifiesto No Comunista*, se moriría de envidia. No es la modernización que pensaba Germani de integración al anómalo capitalismo de los “30 años dorados”. Sino a este “capitalismo en serio” que nos hunde en la barbarie y pone al límite la existencia de la especie y el planeta.

Con el “posneoliberalismo” se han ido cumpliendo las metas de la contrarrevolución capitalista. El gran capital está ganando como nunca, y esto hasta se exhibe como logro en campañas electorales. Paso a paso se le ha ido legitimando con el discurso contra el neoliberalismo y hasta con el ingrediente épico del *progresismo* y la *inclusión*. Se ha fortalecido al capital material y simbólicamente. Se ha fortalecido a la derecha incluso sin que sus representantes políticos ocupen el gobierno.

Esto no puede captarse ni anticiparse si la mirada está anclada en los acontecimientos puntuales de la confrontación política o electoral. Se necesita pensar desde la reproducción capitalista, única manera de desenmascarar sus objetivos permanentes y sus tácticas cambiantes. Esto no se ve si no se tiene una concepción epistémica anticapitalista verdadera. No se trata de maximalismo o de ortodoxia marxista, es la única manera de tener claro, al menos, lo que *no se debe hacer*.